



TIPO: SALIDA
FECHA: 28-07-2025 09:10:55
TRAMITE: 105002 - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - LAB
SOCIEDAD: 800130867 - MONTOYA SALDARRIAGA & CIA S EN C S
REMITENTE: 221 - GRUPO DE DEFENSA JUDICIAL
DESTINO: 800093816 - RAMA JUDICIAL
TIPO DOCUMENTAL: Solicitudes
CONSECUTIVO: 221-051169
FOLIOS: 4
ANEXOS: 0

Doctor
JUAN PABLO DOSSMAN CORTEZ
MAGISTRADO
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
E.S.D.

Asunto: 2025-01-526034 PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA MEDIDA CAUTELAR

Radicado: 76001233300020240065000
Demandante: ALBA LUCÍA MONTOYA JIMÉNEZ
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Medio de control: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

MARÍA ALEJANDRA CAICEDO HURTADO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.090.493.344 de Cúcuta, portadora de la tarjeta profesional No. 325.747 expedida por el C.S. de la J., actuando en calidad de apoderada judicial de la Superintendencia de Sociedades, según poder que adjunto y conforme al cual solicito que se me reconozca personería jurídica, procedo a pronunciarme respecto a la medida cautelar solicitada.

I. ANTECEDENTES

Solicita la demandante se decrete la siguiente medida cautelar:

- La suspensión provisional de los efectos de la Resolución No. 2024-01-217536 del 16 de abril de 2024 emitida por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

II. MANIFESTACIÓN FRENTE A LA MEDIDA CAUTELAR

ME OPONGO A ELLA, por las razones que se expondrán a continuación, ya que no se configuran los requisitos para decretar la medida cautelar solicitada.

A. CONSIDERACIONES GENERALES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS CAUTELARES

El artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, regula la procedencia de las medidas cautelares indicando que estas podrán ser decretadas por el juez o magistrado ponente en los casos que lo considere necesario para proteger y garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

Por otro lado, con el fin de decretar medidas cautelares, si bien es cierto el juez tiene discrecionalidad para decretarlas, su decisión debe estar acorde con lo previsto en el artículo 231 del CPACA:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento

del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurren los siguientes requisitos:

- 1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.*
- 2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.*
- 3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.*
- 4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:*
 - a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o*
 - b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.”*

De esta manera para que la medida sea procedente esta debe estar justificada, y el juez debe tomar medidas realizando un juicio de ponderación, con el fin de que con ésta no se vaya a afectar injustificadamente a una de las partes.

Sobre este asunto, en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, en providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente núm. 2014-03799, Consejera ponente: doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez), señaló:

“(…) La doctrina también se ha ocupado de estudiar, en general, los criterios que deben tenerse en cuenta para el decreto de medidas cautelares, los cuales se sintetizan en el fumus boni iuris y periculum in mora. El primero, o apariencia de buen derecho, se configura cuando el Juez encuentra, luego de una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y juicios de verosimilitud o probabilidad, la posible existencia de un derecho. El segundo, o perjuicio de la mora, exige la comprobación de un daño ante el transcurso del tiempo y la no satisfacción de un derecho (…).”

Por su parte, la Sección Tercera, mediante auto de 13 de mayo de 2015 (Expediente núm. 2015-00022, Consejero ponente: doctor Jaime Orlando Santofimio Gamboa), sostuvo lo siguiente:

“(…) Lo anterior quiere significar que el marco de discrecionalidad del Juez no debe entenderse como de arbitrariedad, razón por la cual le es exigible a éste la adopción de una decisión judicial suficientemente motivada, conforme a los materiales jurídicos vigentes y de acuerdo a la realidad fáctica que la hagan comprensible

*intersubjetivamente para cualquiera de los sujetos protagonistas del proceso y, además, que en ella se refleje la pretensión de justicia, razón por la cual es dable entender que **en el escenario de las medidas cautelares**, el Juez se enfrenta a la exposición de un razonamiento en donde, **además de verificar los elementos tradicionales de procedencia de toda cautela, es decir el fumus boni iuris y el periculum in mora, debe proceder a un estudio de ponderación y sus sub principios integradores de idoneidad, necesidad y proporcionalidad stricto sensu, ya que se trata, antes que nada, de un ejercicio de razonabilidad (...)***

Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que **actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos**, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida. Su finalidad está dirigida a *“evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho”*

La Ley 1437 de 2011, en su artículo 88, reza lo siguiente:

“ARTÍCULO 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Cuando fueren suspendidos, no podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se levante dicha medida cautelar.”

La Resolución No. 2024-01-217536 del 16 de abril de 2024, mediante la cual la Superintendencia de Sociedades resolvió un recurso de queja confirmando la decisión proferida por la Cámara de Comercio de Cali en el sentido de rechazar el recurso de apelación, se encuentra en firme y goza de presunción de legalidad, en tanto no exista pronunciamiento en contrario por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa.

En consecuencia, los argumentos esgrimidos por el apoderado de la parte demandante en su escrito introductorio deben ser considerados como elementos fácticos cuya finalidad es sustentar el análisis de legalidad del acto administrativo cuestionado, análisis que deberá surtirse dentro del correspondiente proceso judicial, escenario natural para el debate jurídico de la inconformidad planteada. Cabe destacar que hasta la fecha dichos planteamientos no han sido objeto de controversia judicial.

Asimismo, no se advierte en el escrito de demanda una argumentación jurídica robusta y suficiente que permita colegir, de manera clara y evidente, la existencia de un perjuicio actual o inminente de carácter irreparable derivado de la expedición del acto administrativo impugnado. En tal virtud, no se configura, por ahora, la necesidad de decretar la suspensión provisional de los efectos del referido acto, máxime cuando, al haberse admitido el presente medio de control, se encuentra sometida a escrutinio judicial la legalidad del mismo, lo cual deberá definirse una vez se surtan en debida forma todas las etapas procesales pertinentes.

Por lo tanto, hasta el momento, no se cuenta con elementos de juicio suficientes que permitan establecer, con el grado de certeza requerido, la existencia de una vulneración normativa como la que alega la parte demandante, ni mucho menos la inminencia de un perjuicio irremediable que justifique una medida cautelar de carácter urgente.

III. SOLICITUD

Validar documento Res. 325 19-01-2015
Mde2-ecM4--793-02c4-17F3-02c4

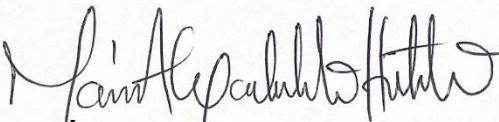
Negar la medida cautelar por no cumplir con los requisitos de procedibilidad.

IV. ANEXOS

Acompaño con este escrito los siguientes documentos:

- 1. Poder para actuar.
- 2. Certificación de la Dra. Consuelo Vega Merchán como coordinadora del grupo de Defensa Judicial de la Superintendencia de Sociedades.
- 3. Copia de la Resolución. No 100-000041 de 2021 expedida por el Superintendente de Sociedades, contentiva de la delegación de funciones de la Superintendencia de Sociedades.
- 4. Cédula de ciudadanía.
- 5. Tarjeta Profesional.

Cordialmente,



MARÍA ALEJANDRA CAICEDO HURTADO
C.C. 1.090.493.344 de Cúcuta
T.P. 325.747 del C.S. de la J.

ELABORADOR(ES):
NOMBRE: M3344
CARGO: Funcionaria Grupo de Defensa Judicial
REVISOR(ES) :
NOMBRE: M3344
CARGO: Funcionaria Grupo de Defensa Judicial
APROBADOR(ES) :
NOMBRE: MARIA ALEJANDRA CAICEDO HURTADO
CARGO: Funcionaria Grupo de Defensa Judicial

Validar documento Res. 325 19-01-2015
Mde2-ecM4--793-02c4-17F3-02c4